

EXP. CTFGEC-008-2023-II

- - - Colima, Colima a 26 de enero del año 2023, la suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del oficio **DFECC´003/2023**, suscrito por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el cual se pronuncia sobre la reserva parcial de información derivada de la solicitud de información realizada por quien se identifica como "**Mariana Cendejas**", mediante escrito que fue presentado ante esta Unidad de Transparencia, radicándose mediante el número de folio 061903923000045, en la cual le solicita información referente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que para lo cual se remite un archivo en Excel para el procesamiento de su llenado.

- - - **VISTO** para **RESOLVER** la confirmación, revocación o modificación de la determinación de la reserva parcial de la información realizada por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, y estando debidamente constituido el Comité de Transparencia, presidido por el C. Director General de Procedimientos Penales y con la participación del Director General de Servicios Administrativos y del Visitador General que lo integran, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, procede a realizar el estudio y análisis de la resolución administrativa que a continuación se presenta, - - - - -

RESULTANDO

1. Mediante escrito presentado a la Unidad de Transparencia, el día 18 de enero del año 2023, se tuvo por recibida la solicitud de información realizada por quien se identifica como "**Mariana Cendejas**", quedando registrada bajo el número de folio 061903923000045, mediante la cual requiere información

pública referente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que para facilitar el procesamiento de la información, adjuntó un archivo en formato Excel para su llenado.

2. El día 19 de enero del 2023, mediante oficio TRANS-075/2023, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, fue solicitado el apoyo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, remitiendo a su vez el anexo mediante el cual se requiere la informaron.
3. Finalmente, mediante oficio **DFECC´003/2023**, de fecha 24 de enero del 2023, con fecha de recibido por este Comité el mismo día de su elaboración y suscrito por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dirigido al Comité de Transparencia de la Fiscalía General, se remite el acuerdo de reserva y prueba de daño parcial respecto de la información siguiente: **"punto 2.3 del apartado de organización de la Fiscalía Anticorrupción", desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías."** Lo anterior con el propósito de que el Comité confirme, modifique o revoque la reserva de información planteada.

CONSIDERANDOS

1. **COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la reserva parcial de información propuesta por el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que serán el Director General de Procedimientos Penales, el Director General de Servicios Administrativos y el Visitado General.

El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Director General de Procedimientos, o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dirección que al efecto designen como sus representantes.

2. ANÁLISIS DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Se advierte que con fecha 24 del mes de enero de 2023, fue recibido oficio DFECC´003/2023, suscrito por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, con fundamento en la fracción II del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para que resuelva confirmar, modificar o revocar la determinación de reserva parcial de la información, con relación a **"punto 2.3 del apartado de organización de la Fiscalía Anticorrupción", desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías."** en atención a los siguientes argumentos:

Oficio: DFECC´003/2023

Asunto: se remite acuerdo de reserva y prueba de daño

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA FISCÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA P R E S E N T E.

Por instrucciones del Licenciado Mario Ochoa García Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y en términos del numeral 46 primer punto, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en atención al similar con número **TRANS-075/2023**, de fecha diecinueve de enero del año en curso signado por el Licenciado Juan Carlos Cervantes Salas, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, quien solicita contestar a lo que esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción corresponda a lo petitionado por "Mariana Cendejas", por medio del portal web de Plataforma Nacional de Transparencia,

radicada mediante número de folio 061903923000045, en lo que concierne a esta petición se envió mediante y en la que se requiere la siguiente información:

"Punto 2.3 del apartado de organización de la Fiscalía Anticorrupción", desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías"

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1º, 6º, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 106 numeral 4 y 5 fracción IV y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 106, 110, 111, 112, 114, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 103, 04 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción **clasifica la información solicitada como de naturaleza reservada**, de conformidad a los argumentos jurídicos que se establecieron en el acuerdo de reserva FECC´001/2023, que adjunto al presente se remite para que en términos del numeral 120 con relación al 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima este Comité se sirva a resolver sobre la confirmación, modificación o revocación. Una vez agotado lo anterior, en el supuesto de la confirmación, se remita la resolución a la Unidad de Transparencia para que conforme a sus atribuciones proceda a notificar la respuesta de la solicitud de información pública a **"Mariana Cendejas"**.

Sin más por el momento me despido con un respetuoso y atento saludo.

[...]

ACUERDO FECC 001/2023 MEDIANTE EL QUE SE ESTABLECE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR "MARIANA CENDEJAS" REGISTRADA BAJO EL FOLIO 061903923000045.

Colima, Colima, a los 23 veintitrés días del mes de enero del año 2023 (dos mil veintitrés), se da cuenta con el oficio número **TRANS-075/2023**, firmado por el Licenciado Juan Carlos Cervantes Salas, titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por medio del que se remite la solicitud de información pública realizada por **"MARIANA CENDEJAS"** mediante de la Plataforma Nacional de Transparencia, al que se provee en el siguiente sentido:

Visto el contenido de la solicitud de información pública, radicada bajo el folio **061903923000045** del que se desprende la petición realizada por **"MARIANA CENDEJAS"**, en el que requiere la siguiente información específicamente por lo que ve al apartado de su petición:

"ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA; DESGLOSAR CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN TRABAJAN EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: POLICÍAS."

A efecto de resolver lo relativo a la citada solicitud de información, se realiza una ponderación de derechos y principios, tomando en primer lugar como principio rector al de máxima publicidad respecto al acceso de información y por la otra el de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia; bajo este tenor se toma en cuenta que el ejercicio del derecho de acceso a la información previsto desde la esfera internacional en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos desde el que se dispone como límite de la publicidad de la información, específicamente cuando sea necesaria para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública; numeral anterior que es acorde con el contenido del diverso 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como parte de los Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, en la Declaración Conjunta (2006) el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, en la discusión en conjunto relativa a los temas de la materia, para lo que aquí interesa se subrayó que las excepciones al derecho al acceso a la información deben ser establecidas de manera clara y el acceso debería ser autorizado a menos que **la divulgación causara daño serio a un interés protegido, o bien que este daño es mayor que el interés público en acceder a tal información.**

En este orden de ideas, la fracción primera del apartado "a" del artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y **sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.**

En el ámbito local, nuestra Constitución es acorde a lo previsto en la Constitución Federal, pues en la fracción primera del apartado "b" del artículo 5 cinco se refiere a **la posibilidad de reservar temporalmente la información** por razones de interés público y **seguridad en términos que fijan las leyes.**

El dilema planteado de conflicto entre principios, supone elegir la opción más racional que interfiera lo menos posible entre estos, fortaleciendo esta decisión con las premisas jurídicas que puedan fortalecer esta decisión. El 15 quince de abril del año 2016 dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; la séptima disposición general de estos lineamientos establece que:

"La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. **Se reciba una solicitud de acceso a la información;**
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

Asimismo, el octavo lineamiento señala que para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado

internacional suscrito por el estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial, en el caso que nos ocupa y que motiva la posible reserva de la información es en lo dispuesto en su numeral 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de la base de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detención, información criminal, **personal de seguridad pública**, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos huellas dactilares, teléfono celulares medidas cautelares soluciones alternas y formas de terminación anticipadas, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema, **cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública** que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público, no tendrá acceso a la información que en ellas contenga. Así mismo el artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, dispone que toda información para la seguridad pública generada o en poder de las instituciones policiales se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse, y de tratarse de conformidad con la mencionada Ley y demás disposiciones aplicables; de la misma manera en el artículo 76 fracciones I, II Y III de la referida ley menciona que se considera información reservada sin necesidad de emitir acuerdo respectivo aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública o el combate a la delincuencia **así como la información cuya revelación pueda ser utilizada o potenciar una amenaza a la seguridad pública a las instituciones del Estado.**

La solicitud que ocupa al presente acuerdo pretende la entrega de información relacionada y exclusiva de las instituciones de seguridad pública específicamente respecto al personal perteneciente a estas corporaciones en materia de seguridad ya que requieren:

"ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA; DESGLOSAR CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN TRABAJAN EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: POLICÍAS."

Por consecuencia implica la divulgación de información estrictamente reservada conforme a los numerales arriba enunciados, pues como tal se considera reservada por pretender obtener información respecto al personal perteneciente a las instituciones de seguridad pública y a las instituciones del Estado, como lo son los policías investigadores adscritos directamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En este sentido y en consideración al principio de excepcionalidad de la norma general, regulado por los artículos 106, 110, 111, 115 y 116, fracciones X y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que se transcriben de la siguiente manera:

Artículo 106.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la presente Ley, de acuerdo a las normas que se plantean para el tratamiento de la información reservada y la confidencial" [...]

Artículo 110.- Los sujetos obligados deberán resolver respecto del carácter reservado o confidencial de la información que obre en su poder. [...]

Artículo 111.- La prueba de daño a que se refiere el artículo anterior tendrá como objetivo justificar que de divulgarse la información se generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público; que el riesgo de entregar la información es mayor que las ventajas de su difusión y que la medida representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que se causaría con la entrega de la información. [...]

Artículo 115.- Los sujetos obligados calificarán la reserva de información a través de la aplicación de la prueba de daño en los términos que al efecto

disponen la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al principio de excepcionalidad. [...]

Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.

En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

[...]

VII. Afecte los derechos del debido proceso;

[...]

X. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y

[...]

XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales."

Por otra parte, sus correlativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contenido en las fracciones XII y XIII del artículo 113, que a la letra dice:

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

X. Afecte los derechos del debido proceso;

[...]

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales."

Disposiciones que se relacionan con lo estipulado en el artículo 106 numeral 4 y 5 fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, los cuales transcribo de la siguiente manera:

ARTÍCULO 106. Información contenida en las bases de datos

[...]

4. Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones Policiales, órganos desconcentrados y descentralizados se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

5. Para efectos de la presente Ley se considera información reservada, sin necesidad de emitir el acuerdo respectivo, la siguiente:

[...]

IV. La contenida en averiguaciones previas, carpetas de investigación, entrevistas, expedientes, los demás archivos o sus soportes en medios electrónicos relativos a la investigación, para la prevención y la investigación de los delitos en los términos de esta Ley, las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las contenidas en los procedimientos en materia de Justicia Penal para

Adolescentes y las relacionadas con las faltas administrativas, por el tiempo que determinen las autoridades competentes.

Por lo anterior se concluye que de entregarse la información solicitada se estaría vulnerando y poniendo en riesgo la integridad física, la vida y la seguridad de las personas, obstruir la persecución de los probables hechos constitutivos de delito y a su vez se vulneraría la seguridad pública del Estado. De lo anterior se desprende que si bien es cierto el artículo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima establece que, como regla general la información que se encuentra en poder de los sujetos obligados tiene el carácter de pública y en ese sentido los particulares tienen el derecho a imponerse de la misma, en la forma y términos del ordenamiento señalado; también lo es que, la fracción III de dicho dispositivo, señala como excepción la información reservada o de carácter confidencial.

En razón de lo anterior, cobra especial interés el contenido de los artículos 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de la base de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detención, información criminal, **personal de seguridad pública**, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos huellas dactilares, teléfono celulares medidas cautelares soluciones alternas y formas de terminación anticipadas, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público, no tendrá acceso a la información que en ellos contenga. Así mismo el artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, dispone que toda información para la seguridad pública generada o en poder de las instituciones policiales se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse, y de tratarse de conformidad con la mencionada Ley y demás disposiciones aplicables; de la misma manera en el artículo 76 fracciones I, II Y III de la referida ley menciona que se considera información reservada sin necesidad de emitir acuerdo respectivo aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública o el combate a la delincuencia así como la información cuya revelación pueda ser utilizada o potenciar una amenaza a la seguridad pública a las instituciones del Estado. Razonado lo anterior se afirma que los sujetos obligados deben proporcionar la información pública que se encuentre en su poder, y los particulares tendrán el derecho de imponerse de la misma, teniendo como excepción la información que sea de carácter reservado o confidencial.

Luego entonces, se arriba a la conclusión de que, al tratarse de información reservada, por considerarse lo peticionado como revelar información confidencial exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública y demás instituciones del Estado en la materia, sin que exista otra hipótesis o información que disponga lo contrario.

Por lo que de divulgarse la información se generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público; además de que el riesgo de entregar la información es mayor que las ventajas de su difusión.

Por otra parte, tomando en consideración la naturaleza de la información solicitada, las obligaciones inherentes a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de seguridad pública, propiamente en la investigación y persecución del delito, así como las atribuciones que ejerce en materia de acceso a la información pública, es adecuado y procedente su clasificación, para ser tratada temporalmente con el carácter de reservada, conforme a lo señalado por el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en relación a los numerales antes invocados.

Análisis específico de la prueba de daño.

En adición a lo expuesto, se estima que la clasificación antes advertida también se actualiza desde la especificidad que en aplicación de la prueba de daño mandatan los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cuya delimitación como se verá enseguida, necesariamente debe responder a la propia dimensión del supuesto de reserva con el que se relacione su valoración. El citado ordenamiento identifica un catálogo de hipótesis a partir de las cuales deberá entenderse reservada cierta información, cuya esencia, más allá de su ámbito genérico de protección, se construye a partir de elementos y objetivos diametralmente distintos y específicos, lo que, por ende, incide en la valoración (particular intensidad) de la prueba de daño que sobre cada uno pueda prevalecer (en cada caso concreto).

En el caso, de acuerdo con el alcance de la causa de reserva prevista en el artículo 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correlacionado con el diverso numeral 116 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que estima que la valoración de la prueba de daño debe reducirse precisamente a los propios elementos que de manera categórica condicionan su surgimiento, es decir, que la información que se pretenda se encuentre en facultades de ser otorgada en este caso por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por tratarse de personal adscrito directamente a la misma, lo cual ocurre con la información que se peticiona en la presente solicitud.

No es óbice mencionar, que el numeral 121 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, establece que no podrán invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con **actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables**. En el asunto que nos ocupa derivado de la petición que hoy se analiza como reservada, se trata específicamente de revelar información relacionada con la capacidad de reacción y fuerza de una Institución en materia de procuración de justicia, por lo que se considera por esta Representación Social que dicha información al encontrarse al alcance del público la información solicitada, se pondrán de manifiesta las características de seguridad con las que cuenta el estado en específico en materia de procuración de justicia, lo cual permite que personas a redes delincuenciales puedan poner en riesgo la estabilidad del estado; así como la integridad física de los elementos policiacos en este caso los adscritos directamente a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que ejercen funciones de alto riesgo por la naturaleza de delitos que investigan en materia de combate contra la corrupción, razón por la cual se considera necesario limitar diversos rubros de la información pública para garantizar aspectos legales como la utilización indebida de la información estratégica de esta dependencia y salvaguardar la vida e integridad de las personas así como la estabilidad del estado, relacionado con la procuración de justicia y el combate efectivo contra hechos con apariencia de delito en materia de corrupción.

Al tenor de estos argumentos y en razón a que la divulgación de la información contenida en las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detención, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfono celulares, medidas cautelares, soluciones alternas, y formas de terminación anticipada, sentenciados y demás necesarias para la operación del sistema cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través inclusive de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que por dichas razones y argumentos el público en general no tendrá acceso a la información contenida en ellos, ya que como se ha venido plasmando conllevaría un riesgo real en la dinámica del cuidado de la futura comisión de delitos en materia de corrupción, al verse vulnerados de darse a conocer la información que se

solicita, así y principalmente poner en riesgo la vida e integridad de los Policías Investigadores adscritos a esta dependencia.

Por virtud de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1º, 6º, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 31, 32 y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, 106 numeral 4 y 5 fracción IV y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 106, 110, 111, 112, 114, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 103, 04 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción **clasifica de naturaleza reservada** la información solicitada por **"MARIANA CENDEJAS" REGISTRADA BAJO EL FOLIO 061903923000045**.

"ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA; DESGLOSAR CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN TRABAJAN EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: POLICÍAS."

Por lo que en términos del artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se ordena girar el oficio correspondiente al que se deberá de adjuntar una copia de este acuerdo dirigido al Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, quienes deberán resolver sobre la procedencia de la solicitud confirmando, modificando o revocando la clasificación de reserva de la información que mediante este conducto se ha generado por las consideraciones y argumentos jurídicos que del mismo se desprenden.

SE ACUERDA:

--- **PRIMERO:** Se **clasifica de naturaleza reservada** la información solicitada por **"MARIANA CENDEJAS" REGISTRADA BAJO EL FOLIO 061903923000045**, específicamente a lo que se refiere:

"ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA; DESGLOSAR CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN TRABAJAN EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: POLICÍAS."

--- **SEGUNDO:** Gírese el oficio correspondiente al que se deberá de adjuntar una copia de este acuerdo dirigido al Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, quienes deberán resolver sobre la procedencia de la solicitud confirmando, modificando o revocando la clasificación de reserva de la información que mediante este conducto se ha generado por las consideraciones y argumentos jurídicos que del mismo se desprenden.

Así lo acordó y firma para constancia la Maestra Esperanza Ramírez Vela, Directora de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima.

[...]"

3. ANÁLISIS POR PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA, RESPECTO DE LA RESERVA PARCIAL DE INFORMACIÓN SOLICITADA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la reserva parcial de la información emitida por la Directora de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, obedece al cauce natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

Luego entonces, con relación a la reserva parcial de información relativa a; **"punto 2.3 del apartado de organización de la Fiscalía Anticorrupción", desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías."** se determina que la reserva parcial de dicha información, se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, cuenta con la motivación y fundamentación adecuada, la cual permite allegarse de los elementos administrativos necesarios para que este Comité se encuentre en condiciones de resolver respecto de la información reservada, tal como se encuentre establecido por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la clasificación de información reservada parcialmente emitida por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obedece al acuse natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

En éste sentido para mejor proveer en la argumentación del asunto en cuestión, es indispensable establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, mediante procedimientos sencillos y expeditos, pero al mismo tiempo vigilar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como establecer las bases y la información de interés público

que se debe difundir proactivamente, todos ellos son elementos que debemos de ponderar en la solución y respuesta a los planteamientos concretos de la ciudadanía en las solicitudes de información.

Luego entonces, para poder arribar a una resolución administrativa en donde exista una motivación y fundamentación adecuada, que reúna con suficiencia y razonabilidad legal, las argumentaciones jurídicas en las que se sustenta la presente determinación, partiremos de un análisis de los argumentos expuestos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ponderando a la luz de los derechos fundamentales de acceso a la información que le asisten a la solicitud, las facultades y obligaciones de los sujetos obligados.

Por lo que este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, en un ejercicio de estudio y análisis de lo solicitado por la C. **Mariana Cendejas**, pondera con sumo cuidado **la clasificación de información reservada**, decretada por el encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del estado, por el periodo máximo de cinco años, en atención primordialmente a las siguientes consideraciones:

Este Comité de Transparencia considera que la información solicitada encuadra en los supuestos de información protegida, cuyo acceso deberá estar limitado temporalmente y deberá sujetarse a las limitaciones que le devienen al carácter de Reservada; razón por la cual no deberá proporcionarse o permitirse su acceso ejerciendo el derecho de información, existiendo la obligación de reserva por disposición imperativa de la propia normatividad aplicable, que sujeta a la clasificación que de ella se realice en el presente dictamen y en consecuencia como resultado la misma no podrá ser proporcionada, ministrada o permitirse su acceso a persona alguna distinta de las que por disposición de la Ley aplicable tengan la atribución de requerir información a ésta Fiscalía General Estatal, o bien, por la naturaleza propia de sus funciones, deban o puedan tener acceso a la misma, lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo 116 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Colima; en virtud de que, debido a las funciones que por disposición legal desempeña esta institución como órgano procurador de justicia, pudiera resultar riesgoso el hecho de ministrar, permitir el acceso o proporcionar información relacionada con el número de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, toda vez que su divulgación puede causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que de llegarse a conocer, se obtendría información relevante en materia de seguridad pública y procuración de justicia, puesto que se facilitaría la fácil localización, siendo en su mayoría elementos operativos de esta dependencia o en su caso servidores públicos cuya función es también operativa, y que su uso se encuentra condicionado a la expresión de voluntad del titular del derecho que deberá ser en forma libre, expresa e informada, sin existir hasta este momento, una manifestación libre, expresa e informada, de los titulares del derecho protegido por la Ley para su ministración, por lo que de darse sería en franca violación a la normatividad aplicable, con la consiguiente responsabilidad correspondiente para este sujeto obligado, por lo que se reitera que al darla a conocer se comprometería seriamente la persecución de delitos, puesto que denotaría los instrumentos que son utilizados en áreas específicas para llevar a cabo las acciones de investigación y persecución de posibles conductas delictivas y la probable responsabilidad de personas en su comisión, así mismo, toda vez que su divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes.

Situación similar a la anterior, en la que es evidente el riesgo de proporcionar información referente con el número de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción toda vez que su divulgación puede causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que, de llegarse a conocer, se obtendría información relevante en materia de seguridad pública, asimismo los servidores públicos que realizan funciones operativas, integrantes de esta institución y, el hecho de dar informar sobre con el número de servidores

públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que resulta sensible para el buen desempeño de las labores en la investigación y persecución de los delitos. Máxime que se estaría a mayor posibilidad de identificar al o los elementos asignados en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Situación en la que se pone en riesgo a los servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la seguridad pública, la integridad física de sus integrantes, dado que desarrollan actividades dentro de la procuración de justicia, en la que persiguen e investigan a probables responsables de conductas delictivas, entre ellas, las consideradas como graves por las leyes punibles en nuestra entidad; trayendo como consecuencia, la posibilidad de que haciendo uso de represalias, atenten en contra de su persona, vulnerando su seguridad personal, laboral y familiar, ya que con ello, se facilita su localización y posible repercusión de los delincuentes o de quien pretenda menoscabar su salud o atentar contra su vida, ya que los servidores públicos que laboran en ésta dependencia cuya principal función, de conformidad a lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 81 de su análoga estatal, y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; es la responsable de la procuración de justicia, en los términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad y profesionalismo.

De lo anterior, y tomando en consideración lo establecido en el artículo 2 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece literalmente lo siguiente:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar

las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así **como la investigación y la persecución de los delitos** y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 110.-

...

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

Complementada con lo que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima en sus artículos 106 numerales 5 fracciones II que textualmente expresa:

ARTÍCULO 106. Información contenida en las bases de datos

...

5. Para efectos de la presente Ley se considera información reservada, sin necesidad de emitir el acuerdo respectivo, la siguiente:

...

II. Aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de

seguridad pública o el combate a la delincuencia, así como la integración de los resultados de las evaluaciones de control de confianza;

...

Por ello este cuerpo colegiado, considera que el hecho de dar a conocer la información sobre el numero de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, atenta contra el interés público y difunde información que, sin duda alguna, pone en desventaja a esta autoridad, ya que ello le restaría capacidad, trayendo consigo un perjuicio insalvable a las acciones que hasta el momento han sido emprendidas para combatir al crimen, recuperar el orden y mantener la paz pública en Colima.

Por lo anterior, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos invocados y los transcritos en el cuerpo del presente instrumento, este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que la revelación, difusión y/o entrega de la información que precise el número de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, produce los siguientes:

Daño probable. - Se configura al hacer pública la información relacionada con el numero de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que refiere parte de esta institución, se pondrían en riesgo información que pudiera evidenciar acciones estratégicas en materia de procuración de justicia, lo anterior de conformidad en lo establecido por el artículo 116 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; ello virtud de que, debido a las funciones que por disposición legal desempeña esta institución como órgano procurador de justicia, pudiera resultar riesgoso el hecho de ministrar, permitir el acceso o proporcionar información relacionada a las características pretendidas, ya que de llegarse a conocer, se comprometería seriamente la seguridad pública de nuestra entidad, puesto que denotaría los elementos de la policía que son ubicados en áreas específicas

para llevar a cabo las acciones de investigación y persecución de posibles conductas delictivas y la probable responsabilidad de personas en su comisión, ya que son elementos operativos integrantes de esta institución y, el hecho de informar sobre el número de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estaría en posibilidad de identificar los elementos en el puesto de policías, operativos y/o servidores públicos, lo que resulta sensible para el buen desempeño de las labores en materia de procuración de justicia.

Máxime que se estaría a mayor posibilidad de identificar a los servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, situación en la que se pone en riesgo la seguridad pública, la integridad física de sus integrantes; trayendo como consecuencia, la posibilidad de que haciendo uso de represalias, atenten en contra de su persona, vulnerando su seguridad personal, laboral y familiar, ya que con ello, se facilita su localización y posible repercusión de los delincuentes o de quien pretenda menoscabar su salud o atentar contra su vida. Por lo que se reitera que de llegarse a conocer dicha información se puede comprometer seriamente la seguridad pública, información que lamentablemente grupos de la delincuencia organizada hacen lo posible por obtener la mayor información respecto a la autoridad, para mermar sus estrategias tácticas para combatir la delincuencia y disminuir la efectividad de la seguridad pública y procuración de justicia, pues es de considerarse que si se les designó el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con esas características es acorde a sus funciones y actividades que estos desempeñan, no obstante que se trata de personal con funciones meramente operativas, mismos que realizan actividades de alto riesgo. Por tanto, aplica al presente caso la excepción al principio de publicidad de la información requerida.

Daño Presente. - Considerando que dicho daño es aquel detrimento real y actual, que se da al momento en el que se difunda la información estrechamente vinculada con personal que se desempeñan en el ámbito de la seguridad pública en la prevención del delito, nos lleva a puntualizar el que indudablemente en la época actual, entregarse o darse a conocer lo relativo a

información relacionada con el número de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, destinados a funciones de seguridad, se estaría otorgando información estratégica en materia de seguridad pública y prevención del delito, y se pondría en riesgo la integridad física y la vida del personal operativo, pues al proporcionarla los dejaría en un estado de vulnerabilidad, lo que propiciaría una fácil identificación y ubicación física de los mismos y personas cercanas a ellos; es decir, se estarían exponiendo o brindando a la luz los datos esenciales, mismos que deben revestir secrecía, por las funciones que se desempeñan, lo que resulta sensible para el buen desempeño de las labores que la Fiscalía Estatal, desarrolla en la investigación y persecución de los delitos Información que de llegarse a conocer por la ciudadanía en general puede comprometer seriamente la procuración de justicia y seguridad pública de la entidad federativa en que habitamos, proporcionar la información en alusión con el numero de servidores públicos en el puesto de policías que pertenezcan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, información que al ser publica pudiera ser utilizada por la delincuencia organizada, para mermar sus estrategias tácticas para combatir la delincuencia y disminuir la efectividad de la seguridad pública, pues es de considerarse que si se les designó el puesto de policías con esas características es acorde a sus funciones y actividades que estos desempeñan no obstante que se trata de personal con funciones meramente operativas, mismos que realizan actividades de alto riesgo, ya que bastaría para ello hacer referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que personal operativo de esta dependencia y de otras instancias gubernamentales dedicadas al ámbito de la seguridad pública han sido víctimas, y esto pudiera entorpecer la actuación de los servidores públicos en mención y se lesionarían intereses generales y particulares. Por tanto, aplica al presente caso la excepción al principio de publicidad de la información requerida.

Daño Específico. - Éste se define como aquel daño verosímil donde la probabilidad de que ocurra es alta. Dicho de otra manera, que existen razones para creer que sucederá un daño al momento de difundir la información. Efectuando un análisis a los valores en conflicto, tales como afectar la esfera

de la vida privada del personal que desempeña funciones operativas, adscrito a un área específica en donde se desempeña una actividad estratégica de alto riesgo, así como su integridad física y hasta su vida; afectación que se pudiera extender hasta sus familias y personas cercanas, por lo que al dar a conocer el nombre adscripción laboral y física, se estaría dando información de gran interés y utilidad para que grupos de delincuencia organizada puedan organizar, planear y ejecutar dinámicas delictivas en agravio de personal operativo de la institución y de la sociedad en general, por lo tanto no se justifica el interés particular de una persona, pues un interés particular de acceso a la información, no puede estar sobre el principal bien jurídico tutelado por el estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social. No pasa desapercibido el que dar a conocer la información ya referida, se desprende que la información vinculada a personal con funciones en materia de procuración de justicia, tiene elementos suficientes para considerarse como de reserva.

De igual manera, su revelación ocasionaría la ineludible responsabilidad para esta Fiscalía Estatal, al trasgredir disposiciones de carácter obligatorio para proteger y resguardar información reservada, y de la cual se actualiza la necesidad de mantenerla en reserva. Por lo anterior, a consideración del Comité de Transparencia se justifica la necesidad de limitar temporalmente el acceso a la información pública pretendida y, como consecuencia, considera procedente resolver:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente determinación de reserva de información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

SEGUNDO. Es procedente clasificar como información Reservada, toda vez que la información relacionada **"...punto 2.3 del apartado de organización de la Fiscalía Anticorrupción", desglosar cuantos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción trabajan en los siguientes puestos: policías."**, por su trascendencia, alcance y repercusión social, es información pública que encuadra en los supuestos de restricción, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, con el carácter de Reservada, por un plazo de cinco años. Lo anterior de acuerdo con lo señalado en el cuerpo del presente dictamen. - - - - -

TERCERO. Notifíquese a la brevedad la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones conducentes.

- - - Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por unanimidad de votos de su presidente, Lic. Raúl Ramírez Flores, Director General de Procedimientos Penales, Lic. Luis Alejandro Almaraz, el Director General de Servicios Administrativos y el Lic. Fernando Gutiérrez Fuentes, Visitador General.

LIC. RAÚL RAMÍREZ FLORES,
Director General de Procedimientos Penales

LIC. LUIS ALEJANDRO ALMARAZ ALCARAZ
Director General de Servicios Administrativos

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ FUENTES
Visitador General

LICENCIADA CYNTHIA ROCÍO FLORES VÁZQUEZ
Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima No. **CTFGEC-018-2023-II**